**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**

**

**JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

**SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte (2020)

**Acción:**  Tutela

**Expediente:** 11001 3334 003 2020 00065 00

 **Demandante:** Mauricio Pérez Cáceres

**Demandado:** Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

**Asunto: FALLO TUTELA**

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela presentada, por el señor Mauricio Pérez Cáceres, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

**1. ANTECEDENTES**

* 1. **Hechos**

El actor sustentó su solicitud en los siguientes:

Manifiesta que presentó petición el 25 de febrero de 2020, en el que solicitó a la Dirección Nacional de Bienestar de la Policía Nacional “*…copia del poligrama, correo electrónico, comunicación o el medio utilizado para la citación a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de la Policía Nacional, el día dos de marzo de 2018…”*

Indica que la entidad accionada no ha dado repuesta a la petición, ni entregada la documentación requerida, afectando el derecho fundamental de petición.

**1.2 Pretensiones**

Se declaré que la Policía Nacional ha vulnerado el derecho fundamental de petición y acceso a la información del accionante, se tutele dichos derechos, y como consecuencia de ello, se ordene a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional que dé respuesta al derecho de petición.

**1.3 Derechos invocados como vulnerados.**

El accionante sostiene que la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional vulneró el derecho de petición y acceso a la información.

**1.4 Trámite procesal.**

Mediante acta individual de reparto, visible a folio 8 del expediente, correspondió a este Despacho, el conocimiento de la presente acción de tutela, la cual fue admitida por auto del 16 de marzo de 2020 (fl.8) providencia que fue notificada en la misma fecha.

En dicho proveído, se ordenó correr traslado por el término de 2 días, al Director de la Policía Nacional y al Director de Bienestar Social de la misma entidad, para pronunciarse sobre los hechos expuestos por la accionante, así como para allegar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes.

**1.5** **Contestación de la acción de tutela.**

La entidad accionada, hasta el momento de proferir este fallo, no dio respuesta a la tutela de la referencia, pese haberse notificado mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2020.

**2. CONSIDERACIONES**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se ejerce para reclamar de la jurisdicción, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando se vean amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares mediante un procedimiento preferente y sumario.

**2.1 Problemas jurídicos a resolver**

¿Vulneró la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, el derecho fundamental de petición y de acceso a la información, al señor Mauricio Pérez Cáceres, al no dar respuesta a la petición elevada el 25 de febrero de 2020?

**2.2 Del derecho de petición.**

El artículo 23 de la Constitución Política, dispone:

*ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.*

En concordancia con lo anterior, los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establecen que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición y, por lo tanto, incluye el derecho a obtener una respuesta completa y de fondo.

Adicionalmente, la precitada normativa dispone que, de forma general, toda petición debe solucionarse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, **salvo situaciones especiales; por ejemplo, cuando se trata de solicitudes relativas a documentos e información se dispondrá de diez (10) días** y cuando se trate de consultas dirigidas a una entidad sobre las materias a su cargo treinta (30) días.

Finalmente, el parágrafo único de referenciado artículo 14, prevé que en aquellos casos en que la autoridad no pueda resolver una solicitud en los plazos señalados, deberá informarlo al interesado y, de todas formas, atenderla dentro un plazo razonable, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.

Ahora bien, respecto del derecho fundamental de petición, la Corte Constitucional en sentencia T–556 de 2013/[[1]](#footnote-1)/[[2]](#footnote-2), reiterando la jurisprudencia expuesta en sentencia SU–975 de 2008, concreta los parámetros que cubren el derecho de petición y los elementos que constituyen su núcleo esencial, en la mencionada providencia se señaló:

*“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta* ***(i****) en la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones ante las autoridades;* ***(ii)*** *en la obligación correlativa de las autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y* ***(iii)*** *en la consecuente obligación de las autoridades de comunicar de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente debe anotarse que el derecho de petición guarda un vínculo de conexidad con otros derechos de igual relevancia como el derecho a la información y a la libertad de expresión.*

*4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende los siguientes cuatro elementos:*

***(i)*** *la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o tramitarlas;*

***(ii)*** *la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la cuestión en los términos consagrados en la ley;*

***(iii)*** *el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado, y*

***(iv)*** *la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o información requerida.”*

De igual forma, la jurisprudencia constitucional[[3]](#footnote-3) ha sido reiterativa en señalar que para que el derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta al mismo ha de ser:

**Suficiente:** Cuando quiera que resuelva materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario.

**Efectiva:** Si soluciona el caso que se plantea.

**Congruente:** Si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone que la solución o respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

De esta manera, solo se entenderá que el derecho de petición se encuentra garantizado cuando la respuesta al requerimiento hecho por el particular cumple con los anteriores aspectos.

En este mismo sentido, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015[[4]](#footnote-4) dispone:

***“Artículo***[***14***](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#14)*. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

***PARÁGRAFO.****Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”*

De acuerdo con los antecedentes legales y jurisprudenciales relacionados en precedencia, por regla general el término para resolver la petición es de 15 días hábiles, y 10 días hábiles cuando se refiera a peticiones de documentos y de información.

**2.7 Del caso concreto**

El señor Mauricio Pérez Cáceres, en causa propia, acude a este mecanismo constitucional, a efectos que le sea amparado el derecho fundamental de petición y derecho a la información, presuntamente transgredido por la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, pues en su criterio, esta autoridad no ha dado respuesta a la petición formulada el 25 de febrero de 2020.

Procede el Despacho a determinar si en el presente asunto, el actuar de la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de petición, del accionante para cuyo propósito, se estudiarán las pruebas allegadas al plenario.

Se encuentran probados dentro del proceso los siguientes hechos:

El 25 de febrero de 2020, el señor Mauricio Pérez Cáceres, presentó petición ante la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, en la que solicitó copia del poligrama, correo electrónico, comunicación o el medio utilizado para la citación a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de la Policía Nacional, el día dos de marzo de 2018 (fl.5).

El Despacho, advierte que la Policía Nacional-Dirección de Bienestar Social, guardó silencio frente a la acción de tutela, a pesar de haber sido notificada de la existencia de la misma.

El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:

*“Artículo****20.*** *Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente,* ***se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano****, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”* (Negrillas del Despacho).

En este contexto normativo, es preciso señalar que cuando la autoridad accionada no rinde el informe solicitado por el juzgado correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos de la acción de tutela.

Ahora bien, resulta oportuno recordar que, el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, establece que toda petición de documentos y de información debe atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, por lo que, al estar demostrado que el accionante presentó petición el **25 de febrero de 2020**, el mencionado plazo venció el **10 de marzo de la misma anualidad**, sin que la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, haya emitido una respuesta.

Incluso, de atender que el término para dar respuesta a la petición del accionante era el general de 15 días, aquel feneció el 17 de marzo de la presente anualidad, sin que la entidad haya acreditado la respuesta clara y de fondo al respecto, pues no respondió la presente acción de tutela, por lo que el Despacho tendrá por cierto que la solicitud de la accionante no fue atendida de manera alguna, en virtud de la presunción de veracidad arriba detallada.

Conforme lo anterior, se amparará el derecho fundamental de petición y acceso a la información del accionante y, en consecuencia, se ordenará al Director de Bienestar Social de la Policía Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, dé una respuesta de fondo, clara, concreta, completa y con los documentos anexos que ella amerite, a la petición presentada por el señor Mauricio Pérez Cáceres el 25 de febrero de 2020, cuya comunicación deberá surtirse dentro del mismo término al accionante en la dirección de correo electrónico o física suministrada en la tutela o en el escrito de petición, para lo cual deberá acreditar el correspondiente recibido por parte del tutelante ante este despacho

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

**RESUELVE**

**PRIMERO. AMPARAR** el derecho fundamental de petición del señor Mauricio Pérez Cáceres, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 79.523.046.

**SEGUNDO. ORDENAR**, al Director de Bienestar Social de la Policía Nacional, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a dar una respuesta de fondo, clara, concreta, completa y con los documentos anexos que ella amerite, a la petición presentada por el accionante, el 25 de febrero de 2020 y a comunicarle la respectiva respuesta dentro del mismo término, a la dirección de correo electrónico o física suministrada en la tutela o en el escrito de petición.

Cumplido lo anterior deberá remitir copia de la respectiva constancia a este Despacho, con el fin de verificar la satisfacción de lo ordenado.

**TERCERO:** Notifíquesela presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz, conforme lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**CUARTO:** Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

****

**ERICSON SUESCUN LEÓN**

**JUEZ**

JJ

1. Sentencia C-818 de 2011, M. P., dr, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia C.951 de 2014, M. P., dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sentencia T-556 de 2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [↑](#footnote-ref-4)